

Entre La Paz y Londres

Son varias las razones por las cuales volvemos a hacer una edición cargada de temas internacionales: 1) la oferta nacional en este ámbito es bastante limitada; 2) ubicarse en tiempos de la globalización, implica mirar y entender lo que sucede en todas partes; 3) todos son temas que repercuten de una u otra manera en nuestro medio o que permiten establecer similitudes, diferencias y hasta contrastes.

Sobre nuestra región, esta vez analizamos la profunda crisis que vive Bolivia, de la que estamos lejos y cerca a la vez.

En cambio, lo que sí es una realidad completamente ajena a nosotros, es la experiencia de integración de la Unión Europea, más allá del no francés y del no holandés, que se explican por razones bastantes más complejas que las que han circulado en nuestro medio.

El viaje a Alemania de una de nuestras colaboradoras nos permite ver cómo, la memoria frente a hechos traumáticos y vergonzosos del pasado puede ir reelaborándose.

El tema del terrorismo merece una vez más nuestra preocupación, y condena, pero planteando a la vez la necesidad de tener un buen diagnóstico y una respuesta adecuada.

Bolivia: Altiplano caliente



Lo que ocurre en Bolivia es grave y tiene repercusiones en la región andina. ¿Puede suceder lo mismo en el Perú? Nuestro país tiene semejanzas con la nación altiplánica, pero también diferencias que no permiten una comparación cercana. Hemos solicitado a Roberto Laserna, un destacado académico boliviano —profesor en la Universidad de Princeton y en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba— un análisis del proceso que vive su país. Asimismo, Juan Ramón Quintana, director del Observatorio de Democracia y Seguridad de la Universidad de La Cordillera, en La Paz, nos ofrece su mirada sobre la participación de la Fuerza Armada en estos escenarios conflictivos frente a procesos más complejos que atraviesan la dinámica y la estructura políticas regionales.

Consumidores de democracia

roberto laserna

Investigador del Centro de Estudios
de la Realidad Económica y Social

La democracia puede comprenderse como un bien público que se consume y se produce. Esta perspectiva permite interpretar la crisis boliviana como expresión de un proceso que ha ido consumi-

do democracia al impulso del populismo conservador que domina la política y aprisiona el sistema de decisiones.

Bolivia vive un momento populista porque se basa en la imposición de perspectivas

fundadas en la presión de quienes se autodefinen y tratan de imponerse como representantes de la sociedad. Estos grupos se apropian de la representación social y asedian a las instituciones democráti-

cas, impidiéndoles ejercer sus funciones y aplicar criterios fundados en el interés general o el bien común. Es también un momento conservador, porque está animado por el deseo de retornar a un pasado que estuvo, precisamente, caracterizado por decisiones orientadas por la presión corporativa y el particularismo, y porque intenta cerrarse defensivamente a la modernidad.

Los movimientos sociales de las décadas de 1970 y 1980, que habían permitido el tránsito del autoritarismo a la democracia, fueron descritos como "productores de democracia" (Ediciones Ceres, 1992). El vigor de la participación social logró abrir entonces el camino de una institucionalidad que, a través de las urnas, permitía la formación de mayorías y minorías explícitas que, a su vez, podían resolver sus diferencias dentro de los marcos normativos del Estado de Derecho. Incluso en su nivel más incipiente, el Estado de Derecho ofrece la posibilidad de que se defiendan los intereses de los sectores menos favorecidos aunque ellos no se hayan organizado para la presión.

Tal es el caso, por ejemplo, de los niños, las mujeres rurales o las comunidades alejadas de los centros urbanos. De hecho, puede comprobarse con facilidad que estos grupos se beneficiaron significativamente de los veinte años pasados de estabilidad institucional. No es casualidad que hayan sido las niñas rurales quienes mayores beneficios lograron por la reforma educativa, ni lo es que las tasas de mortalidad, analfabetismo adulto y ausencia escolar se hayan reducido significativamente; por lo menos hasta el 2002, cuando el censo nacional detectó también mejoras notables en la satisfacción de necesidades básicas.

En el discurso populista se niegan todos estos logros y se resalta el aumento de las desigualdades económicas, que solamente pueden ser comprendidas en referencia a la heterogeneidad estructural, el distanciamiento entre las economías por su vinculación al mercado y la compleja relación de resistencia, bloqueo y aprovechamiento que establecen entre sí los diversos tipos de organización productiva.

Por todo ello, es fundamental recordar que la clave del análisis de los movimientos sociales está en distanciarse del discurso del actor. El discurso es un elemento de la acción, aunque sea presentado como su explicación, y, más que revelar, con frecuencia esconde motivaciones y resultados efectivos.

Tal distanciamiento no es fácil de lograr. Pero cuando uno consigue alejarse del discurso, de la retórica de los líderes y del lenguaje de los militantes, y concentra su atención en los actos y sus consecuencias, puede distinguir con claridad qué son y hacia dónde apuntan las acciones colectivas. Y encuentra, por ejemplo, que las acciones populistas que han prevalecido de manera consistente en los últimos ocho años de la vida política boliviana son (anti)movimientos que, más que producir, consumen democracia, porque debilitan y erosionan el Estado de Derecho y la posibilidad de que prevalezca el bien común.

A despecho de un discurso popular y revolucionario como el que enarbolan sus dirigentes y recogen sus voceros, estos movimientos son consumidores de democracia porque sus acciones pugnan por imponer criterios e intereses corporativos, y al hacerlo ignoran el interés general y los derechos de los demás y destruyen instituciones para satisfacer fines particulares. Aun cuando parezcan actuar en defensa de la democracia o proclamen hacerlo, los hechos muestran que la están consumiendo.

Ahora bien: si las principales fuerzas sociales y políticas están consumiendo democracia, Bolivia se encuentra en una situación de alto riesgo. El



Gobierno breve, el de Mesa duró apenas veinte meses.

debilitamiento de las normas y de las instituciones implica la paulatina desaparición de controles a la lucha social y política, que tiende a hacerse cada vez más cruda y abierta, lo que puede derivar en hechos de violencia de altísimo costo social. Hasta ahora ya han impuesto uno, alto, sobre los grupos más vulnerables.

Este proceso se inició en 1997, cuando el ex dictador Hugo Banzer logró la primera mayoría electoral y el respaldo del Congreso para asumir la Presidencia. Abrumado por su pasado, intentó, desde su campaña, mostrarse como un político sensible a las "demandas populares" e intentó satisfacerlas, independientemente del efecto que pudieran tener sobre el conjunto. En muy poco tiempo se vio obligado a ceder a presiones corporativas cada vez más intensas y fragmentadas. Cuando quiso poner freno a los excesos, ya era muy tarde. En abril del 2000 no pudo aplicar el estado de sitio porque la propia Policía Nacional actuaba como un sindicato más y era parte de los grupos de presión.

La renuncia de Banzer, obligada por un cáncer que causó su muerte poco después, alivió las presiones sociales y permitió realizar las elecciones del 2002. El fuerte núcleo social que lideraba Evo Morales, formado por los campesinos que defienden los cultivos de coca de la erradicación forzada por la política antidrogas de los Estados Unidos, tenía una gravitación suficiente para atraer y liderar a otras organizaciones, de manera que todas encontraron un mecanismo de acción política en el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin otro programa que la resistencia a la intromisión

americana, la crítica a la democracia "neoliberal" y la promesa de restablecer el estatismo, el MAS fue ganando simpatías en las áreas urbanas hasta lograr el segundo lugar en las elecciones.

Cerrado a toda posibilidad de concertación política, el MAS prácticamente empujó el acuerdo de Gonzalo Sánchez de Losada (MNR) con el MIR de Jaime Paz Zamora, al que después se incorporarían otros partidos menores. Esa coalición, forzada por las circunstancias, no logró establecer un Gobierno fuerte, pese a contar con la mayoría congresal. Paralizado por la desconfianza, el Gobierno de Sánchez de Losada se vio crecientemente asediado por presiones y conflictos que no podía satisfacer, por falta de recursos, ni reprimir, por la pérdida de autoridad que ya sufría el Estado.

En octubre del 2003 Sánchez de Losada fue obligado a renunciar, y el Congreso entregó la Presidencia a Carlos Mesa. La caída empezó con una protesta campesina que defendía —en nombre de la justicia comunitaria— a un dirigente acusado de asesinato por encabezar un linchamiento. Esto derivó en un rechazo a la violencia estatal que se amplificó como una lucha por la defensa de los recursos naturales frente a los chilenos, el imperialismo y las transnacionales. Le llamaron "la guerra del gas" y logró no solamente la renuncia del Presidente sino también la postergación de los proyectos de exportación de gas a México y los Estados Unidos.

El Gobierno de Carlos Mesa fue producto y parte del consumo de democracia. Por ejemplo, al aceptar presiones para expulsar a la Lyonnaisse des Eaux dio

mayor credibilidad a las juntas vecinales de El Alto que a los gobiernos municipales de esa ciudad y La Paz, debilitando a esas instituciones esenciales para la democracia. También lo hizo al sacrificar a los superintendentes para aplacar a los grupos de presión. Volvió a debilitar a las municipalidades cuando convocó a los alcaldes para que se pronunciaran sobre temas que no son de su competencia, como la Constituyente o las autonomías departamentales. Y trató de debilitar al Parlamento continuamente al comprometerlo en sus iniciativas sin consulta previa y sin tomar en cuenta su capacidad para realizarlas en los plazos propuestos.

De hecho, casi todas las propuestas de Mesa, improvisadas al calor de la presión, involucraban menos al Ejecutivo que al Congreso, que luego podía fácilmente ser acusado de incumplir acuerdos. Basta mencionar las promesas de la Constituyente, el referéndum y la modificación de la Ley de Hidrocarburos, la reforma del Código Electoral para "seleccionar" prefectos y las autonomías regionales.

A largo plazo, la incorporación de la Asamblea Constituyente como mecanismo habitual de reforma de la Constitución Política del Estado puede tener las más graves consecuencias, puesto que abre la posibilidad de que los fundamentos y principios de estabilidad institucional sean alterados al calor de las luchas circunstanciales o de las coyunturas políticas.

Ilusionado por el deseo de reinventar la política, Mesa reprodujo la práctica populista de Banzer, cediendo continuamente a las presiones corporativas, con lo cual terminó por

estimularlas hasta el límite que lo llevó a renunciar en junio del 2005. El promedio de veintiséis conflictos mensuales que vivió Banzer durante su mandato quedó opacado ante el promedio de Mesa: 53 conflictos al mes, solo entre los registrados en prensa.

Además de eventos conflictivos, muchas de las tensiones recurrentes de la sociedad boliviana fueron irresponsablemente agravadas por el propio Gobierno. Apeló al resentimiento contra Chile para unir al país, con lo cual dificultó el necesario proceso de integración continental. Trató de restar legitimidad a las demandas autonómicas de Santa Cruz agitando el regionalismo. Enalteció los contenidos aimaras de la revuelta de octubre, atemorizando a las clases urbanas, mayoritariamente mestizas, y luego apeló a las clases medias para enfrentar a los indígenas que bloqueaban las vías de comunicación. Ya en el límite de su gestión, pidió a la Iglesia que

mediara en busca de opciones, pero la dejó en el camino al precipitar su renuncia, movilizándolo a diversos sectores para detener al final la posibilidad de que el Congreso hiciera uso de sus atribuciones, aceptara su renuncia y eligiera un sucesor.

En medio de amenazas y presiones, y a pesar de las enormes diferencias que existen en su interior, el Congreso encontró una salida para reencauzar la vida política boliviana. Dio paso a la sucesión del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, viabilizando elecciones generales adelantadas para diciembre del 2005. Para ello fue necesario forzar nuevamente la Constitución, reformando un artículo que redujo el periodo constitucional y aprobando una ley interpretativa que permite la elección de prefectos para los nueve departamentos. Se mantiene, para el 2006, el compromiso de convocar a un referéndum para establecer un sistema autonómico y a la Asamblea Constituyente.

Queda pendiente aún, sin embargo, el desafío más grande: el de restablecer el acuerdo básico de la democracia, que es el respeto por los roles diferenciados de mayorías y minorías, y su traducción institucional en el Estado de Derecho. La explosión de expectativas que ha fragmentado la acción social y restablecido prácticas tradicionales de corporativismo y rentismo en la relación con el Estado permanece aún como la mayor amenaza, no solamente para la democracia, sino para el desarrollo.

Hoy, Bolivia requiere con urgencia una acción concertada para defender su democracia y, cuando menos, garantizar que se reproduzca. No se puede impulsar desarrollo con equidad si no es afirmando el imperio de la ley, exigiendo de los ciudadanos el cumplimiento de obligaciones como base de los derechos, poniendo en duda las agendas impuestas por minorías y rechazando procedimientos ilegítimos. Para consumir democracia indefinidamente, hay que producirla de continuo. ■



Evo Morales, del MAS, al frente de campesinos coccaleros que se oponen a la erradicación forzada.

Una entrevista con Juan Ramón Quintana

A menor Estado, mayor soldado

Comparativamente, ¿cómo aprecia las agendas de seguridad y la conflictividad social de la región andina y el cono sur?

Hay una especie de correspondencia entre estabilidad democrática e intervención militar. En los países del Mercosur existen democracias más fuertes, instituciones más estables y un Estado más sólido. El cono sur expresaría un mapa de estabilidad institucional y de fortaleza estatal que cancela las posibilidades de intervención militar en las crisis políticas.

En la Argentina, ni en el peor momento de sus crisis se produjo intervención alguna de sus Fuerzas Armadas. En el

Brasil, la injerencia militar no discurre sobre la arena política, sino que se reduce al problema de la inseguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas, entonces, no se han convertido en un factor de ajuste de la crisis política, sino que han aparecido solo en los momentos de mayor emergencia para tratar de frenar las crisis de inseguridad.

En el área andina tenemos, por el contrario, un emergente protagonismo político de las Fuerzas Armadas. El caso de Venezuela es elocuente: allá ellas están en el centro de la tormenta, expresando las propias tensiones que atraviesan la sociedad, lo que se corresponde con la debilidad de las instituciones estatales, con la erosión de

ana maría tamayo, josé miguel florez

Área de Defensa y Reforma
Militar del IDL

la autoridad y con la crisis de representación de los partidos para mediar en la conflictividad interna.

El caso más patético es el de Bolivia, donde las Fuerzas Armadas están volviendo al tutelaje social. Yo diría que Bolivia, junto a Venezuela y el Ecuador, constituyen un triángulo en el que se está reconstituyendo el poder militar de veto.

¿Qué piensa sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflictividad interna?

Hay dos casos ilustrativos sobre el reciente protagonismo militar en crisis políticas: el del Ecuador y el de Bolivia. En el caso del primero, el retiro de la confianza de las Fuerzas Armadas al presidente Gutiérrez prácticamente precipitó su caída. En el segundo de estos países, extrañamente, las Fuerzas Armadas no han replicado esta especie de veto militar a un presidente constitucional sino que, por el contrario, han ratificado su adhesión al orden democrático.

Hay que explicar las razones para ello, pues sostener únicamente que las Fuerzas Armadas han internalizado una pedagogía democrática no es más que un discurso.

En el caso de Bolivia es importante reconocer su com-

promiso con la democracia en los últimos veintitrés años. Ello no obstante, desde el 2000 hay en ese país una alta conflictividad. Más propiamente a partir de 1998, cuando las Fuerzas Armadas se incorporaron a la lucha contra el narcotráfico, empiezan a adquirir mayor protagonismo político.

En el caso de la conflictividad interna, prácticamente no hay un punto de ruptura entre la dictadura y la democracia respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas, pues ellas han intervenido continuamente en el restablecimiento del orden público. Además, fue el Gobierno de Banzer el que más les abrió el camino: primero, para una intervención masiva en la lucha contra las drogas; segundo, las involucró en la política de seguridad ciudadana; tercero, las incorporó en la lucha contra el contrabando y en los conflictos sociales, de manera que se abrió una avenida para la intervención militar en espacios que eran de estricta competencia policial.

Estas múltiples funciones condujeron a la emergencia del perfil político de las Fuerzas Armadas, que empezaron a ser sobreexpuestas en los medios. Los presidentes Banzer y Quiroga les dieron un espacio casi deliberativo y, considerando que el sistema político estaba ingresando en una fase de crisis, los militares tuvieron un comportamiento cada vez más político en la medida en que el sistema ingresaba en una fase de deslegitimación y las Fuerzas Armadas empezaron a adquirir un creciente protagonismo político.

En estos últimos años, la intervención de las Fuerzas

Armadas para contener la protesta social ha conllevado efectos dramáticos para la sociedad: en democracia hemos tenido en Bolivia muchos más muertos que durante la dictadura.

En las crisis de mayo y junio últimos, las Fuerzas Armadas han contenido la profunda crisis política y también la conflictividad social que llevaba al país a un punto de no retorno. Y ahí han tenido un comportamiento interesante. A diferencia del pasado, no han formado parte del problema sino que han contribuido más bien a su solución.

Mientras en octubre del 2003 el comportamiento represivo de las Fuerzas Armadas aceleró la caída del régimen, este año no intervinieron y, de esa manera, preservaron la continuidad institucional.

¿A qué se deberían estas diferencias en el comportamiento de las Fuerzas Armadas?

En el 2003, el sistema político mostró un comportamiento autoritario, pues creyó que bastaba con el uso de la fuerza para contener la crisis política. Por eso esta intervención precipitó

la salida de Sánchez de Losada. El presidente Mesa, por el contrario, tomando en cuenta la experiencia del 2003, desarrolló durante su gestión una política de rechazo sistemático a la intervención militar en los conflictos internos, porque entendía que el uso de las Fuerzas Armadas podía acelerar su propia caída.

El otro tema importante es que, a diferencia de lo ocurrido en el 2003, cuando el propio Ministro de Defensa intervino para presionar a las Fuerzas Armadas y propiciar su participación en el conflicto, ahora son las propias Fuerzas Armadas las que le han aconsejado al Presidente que era mejor que no interviniesen.

Para ello, habrían esgrimido cuatro razones. Primero, la crisis y el conflicto social eran tan grandes que cualquier intervención militar, lejos de convertirse en una solución, iba a pasar más bien a formar parte del problema. Segundo, las Fuerzas Armadas observaban que su intervención podía generar una suerte de cohesión social y una contraofensiva de los movimientos sociales, al punto que se podría llegar incluso a la disolución de

Falta de liderazgo

¿Qué papel cumple el Ministerio de Defensa en Bolivia?

El Ministerio de Defensa prácticamente no existe; es solo un acápite burocrático de redistribución de los recursos presupuestales a cada una de las fuerzas. No existe un liderazgo político en el campo de la defensa. No se ha aprovechado los últimos años de democracia para construir esa capacidad. Este ha sido más bien un ámbito de redistribución de las clientelas partidarias. Se ha reproducido el mismo fenómeno de las dictaduras. No ha habido ninguna discontinuidad en el papel del Ministerio de Defensa como una instancia de iniciativa política para la modernización de las Fuerzas Armadas.

las Fuerzas Armadas. Tercero, no estaban seguras de que su intervención iba a ser exitosa, y temían, además, que su fracaso podía invitar a una intervención internacional. Y, cuarto, dadas las características de la crisis y reconociendo las enormes limitaciones para controlarla, las Fuerzas Armadas calculaban que una intervención implicaba consecuencias políticas para la Asamblea Constituyente, que podría pasar la factura no solamente por febrero del 2003 sino también por octubre de ese mismo año y, por supuesto, por el 2005.

Por lo tanto, yo diría que fue sobre todo un sentimiento de autopreservación institucional el que impidió que las Fuerzas Armadas interviniesen en este último año.

Ahora bien: las Fuerzas Armadas no querían intervenir por la complejidad del escenario y por los probables efectos de su participación sobre la propia continuidad democrática y la supervivencia institucional. Pero hay que tomar en cuenta que se plantearon un escenario —que podemos calificar como insoslayable— de intervención: si la conflictividad se profundizaba aun más y ponía en riesgo la unidad de la nación, entonces sí intervendrían. Esto quiere decir que su "autocontención" tenía un límite, marcado por la posibilidad de una fragmentación nacional.

¿Cuál fue la actitud de las élites y cuál la de los sectores populares?

En primer lugar, las élites, particularmente las del Oriente, interpelaron la debilidad del Estado, vieron el no uso de la fuerza como una gran debilidad

Manual boliviano

La Fuerza Armada y el orden público

El Manual, decretado el 14 de enero del 2005, pretendió reducir el campo gris existente entre la normatividad internacional y las leyes nacionales para el uso de la fuerza pública. Antes no sabíamos quién era responsable de las represiones; prácticamente había un limbo en torno de la responsabilidad. No teníamos claro cómo se decidían ni de dónde procedían las órdenes para la intervención militar, y tampoco teníamos claro quién era responsable de las operaciones y de sus consecuencias.

El reglamento nos ha permitido superar en parte estos vacíos, pues ahora sabemos que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en conflictos internos con orden escrita del Presidente, que se deben someter a un código de conducta, y que deben utilizar la fuerza únicamente en determinadas situaciones.

Sin embargo, subsisten aún muchos defectos. Entre ellos, el que concierne al entrenamiento de las Fuerzas Armadas y el modelo que permite que este Manual se pueda aplicar. Y es que el 80 por ciento del personal militar está compuesto por soldados en permanente rotación, sin el tiempo necesario para asimilar los principios y las habilidades necesarios.

Una segunda debilidad tiene que ver con la imposibilidad de ejercer control sobre su cumplimiento. El tercer gran obstáculo es que deja la responsabilidad de la investigación en casos de violaciones de derechos humanos en manos de la justicia militar, lo que favorece la impunidad. La cuarta deficiencia es que no se establece cuáles son los umbrales mínimos y máximos para la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales. Es decir, no se ha roto la "normalidad" de la intervención para lograr su "excepcionalidad".

del Gobierno. Por lo tanto, las élites cruceñas, a las que podemos sumar las paceñas empresariales, demandaron al Presidente el uso de la fuerza.

En segundo lugar, los sectores medios urbanos y los medios de comunicación también se pronunciaron autoritariamente, reclamando al Gobierno la reinstauración del orden a través de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien: dada la ausencia de seguridad en las ciudades, ha ocurrido un fenómeno que, desde mi perspectiva, marca un punto de inflexión en materia de respuesta de varios sectores conservadores a la inseguridad: se ha empezado a formar Comités de Autodefensa, a partir del temor de

una especie de invasión indígena a los barrios residenciales de La Paz. En Santa Cruz ocurrió algo aun más grave: su Comité Cívico, a través de la Unión Juvenil Cruceñista, logró desplegar prácticas violentas que promovieron la formación de piquetes antiindígenas que se estrellaron contra los manifestantes.

En tercer lugar, y respecto de los sectores populares, yo diría más bien que se han mantenido en silencio, sobre todo porque han recordado lo que pasó en el 2003, cuando muchos de los barrios periféricos de La Paz y El Alto resultaron afectados por la crisis. Por ello, decidieron no pronunciarse y esperar que la solución sea política y no militar. ■



Homenaje a las víctimas en London's Trafalgar Square, el 14 de julio.

Las lecciones de Londres

timothy garton ash

Historiador británico, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford

La barbarie desatada en los recientes atentados de Londres solo puede provocar nuestro repudio; nada puede justificarlos. Sin embargo, condenar no basta. Hay que hacer un esfuerzo por analizar y entender lo que está ocurriendo para encontrar respuestas capaces de ganar legitimidad y eficacia. Recordemos que el Perú es "ejemplo" de lo contraproducente que puede ser negarse a comprender y enfrentar adecuadamente un determinado tipo de violencia.

Como lo que ha primado en nuestro medio es el adjetivo sin análisis, nos atrevemos a reproducir un artículo de El País que propone una línea también de reflexión.

Cuando estallaron las bombas en mi ciudad natal, yo estaba dormido en California. Al despertarme, vi a los heridos que salían de esas estaciones de metro londinenses que tan bien conozco y los restos del autobús de la línea 30, a través de la televisión estadounidense. Un comentarista dijo: "Esto

demuestra que vivimos en un mundo en guerra". Y todas las fibras de mi cuerpo gritaron: "No, ésa no es la lección de Londres".

Londres sabe muy bien lo que es la guerra. Recuerda la Segunda Guerra Mundial en sus ladrillos y sus piedras, cosa que Nueva

York no puede hacer. Aunque estos atentados han producido el mayor número de víctimas en Londres desde 1945, no constituyen una guerra en el sentido que les gusta pensar a los comentaristas de Estados Unidos. Las guerras las ganan los ejércitos. Ejércitos respaldados por sociedades arraigadas, economías

sólidas y servicios de información, por supuesto, pero ejércitos. En este caso, no es así.

Porque esto es distinto. Hay tres cosas que hacen posibles estas atrocidades. La primera, el odio que permite a los seres humanos estar dispuestos a matar, e incluso a suicidarse mediante la colocación de bombas, con tal de llevarse consigo a aquellos a los que odian. No es nada nuevo. Tiene unas causas, algunas de las cuales pueden eliminarse. En segundo lugar, está el hecho de que los que odian pueden moverse con gran libertad entre los odiados, gracias a medios de transporte de masas baratos dentro y a través de las fronteras. Muchos viven ya entre ellos, como consecuencia de la emigración de masas. Este aspecto sí es nuevo, por lo menos en esta dimensión. Por último, hay que tener en cuenta uno de los grandes motores de la historia: los cambios—o lo que ridículamente llamamos "avances"—en la tecnología del asesinato. En esta era de guerras asimétricas, un pequeño grupo de personas decididas puede hacer daño a una sociedad entera. Sólo necesita cinco kilos de explosivo en una mochila abandonada en un metro.

Volverá a pasar. El terrorismo no es un ejército concreto al que se pueda derrotar, como la *Wehrmacht* de Hitler. Es una técnica, un medio

para lograr un fin, más fácil de obtener gracias a esos "avances" en la tecnología del asesinato. Volverá a usarse una y otra vez. En cierto modo, tendremos que aprender a vivir con él, igual que hacemos con otras amenazas crónicas. Eso es lo que más impresiona de Londres. Los responsables de la policía de la capital ya habían advertido de que se trataba de saber "no si, sino cuándo" iba a producirse un atentado terrorista. Existían planes previstos para los servicios de emergencia, que parecen haber funcionado razonablemente bien. La flema, la naturalidad, la sobriedad y la decisión con las que los londinenses respondieron a los atentados del jueves eran el reflejo de una larga experiencia, sobre todo de treinta años de atentados del IRA, además de un rasgo del temperamento nacional. "Seguir adelante", como hacen los londinenses, es la mejor respuesta que la gente de la calle puede dar a los terroristas. Tengo que decir que

ellos me hicieron sentirme más orgulloso de mi ciudad que la elección de Londres para acoger los Juegos Olímpicos de 2012, anunciada el día anterior.

¿Cuánta libertad estamos preparados a sacrificar ahora en nombre de la seguridad? Existe un verdadero peligro de que países como Estados Unidos y Gran Bretaña se conviertan en Estados obsesionados por la seguridad nacional, en los que las libertades civiles se vean aún más restringidas. Hay que cuidar que no ocurra, porque pagaremos el precio en libertad y no tendremos ninguna garantía de seguridad. Por mi parte, yo prefiero seguir siendo más libre y tener un riesgo ligeramente mayor de morir en la explosión de una bomba terrorista.

Eso no significa que debemos permanecer pasivos ante estos horrores. Pero la reacción adecuada no consiste, como les gustaría hacernos pensar a los comentaristas de la cadena



Un minuto de silencio frente a la estación King's Cross.

estadounidense Fox News, en emplear más poder militar para eliminar "al enemigo" en Irak o algún otro lugar. Consiste en una política inteligente de información y vigilancia. La policía metropolitana de Londres, que rechazó la melodramática metáfora de la guerra, describió los sitios de las explosiones en el metro y el autobús como "escenas del crimen". Eso es lo que son. Crímenes. Esta policía trabaja en la ciudad con más diversidad étnica del mundo y ha desarrollado unas técnicas pacientes para establecer relaciones comunitarias y recopilar informaciones, además de investigar después de los hechos. No es que así se puedan prevenir todos los ataques. No se pudo impedir éste. Pero es la labor de la policía en el propio país, y no el envío de soldados al extranjero, lo que puede ayudar a reducir la amenaza que representan unos terroristas que actúan y, a veces —como en los atentados de Madrid el año pasado—, viven desde hace años en las

comunidades de inmigrantes de nuestras grandes ciudades. Es no sólo en Londres y Madrid, sino también en Toronto, París, Sidney o Berlín.

Asimismo conviene realizar una política inteligente. Se hizo bien en expulsar a Al Qaeda de Afganistán mediante la fuerza de las armas. En cambio, cada vez está más claro que la invasión de Irak fue un error que, casi con certeza, ha creado más terroristas de los que eliminó. Pero ahora tenemos que sacar el mayor fruto posible de un trabajo mal hecho. Lo último que debemos hacer, después de este atentado, es apresurarnos a dejar Irak. Al contrario, es el momento de que todas las democracias se unan en la causa de construir un Irak pacífico y encaminado hacia la libertad y de que, al mismo tiempo, insistan en la necesidad de cambios en la política de ocupación por parte de un Estados Unidos que ya no está tan entusiasmado ni tan lleno de la soberbia neoconservadora de hace tres años.

Un acuerdo de paz entre Israel y Palestina eliminaría otro gran caldo de cultivo para los terroristas islámicos. Y, desde luego, trabajar para la modernización, la liberalización y, en última instancia, la democratización de Oriente Próximo es la única forma segura, a largo plazo, de secar el pantano en el que se crían los mosquitos terroristas. En este aspecto, más que Estados Unidos, es Europa la que necesita despertarse urgentemente a la obligación de hacer más cosas.

En estos tiempos, los hechos que ocurren en lugares remotos, como Jartum o Kandahar, nos afectan de manera directa; a veces fatal, mientras nos dirigimos al trabajo, sentados en el metro, entre King's Cross y Russell Square. Ya no existe una cosa llamada política exterior. Ésa es tal vez la lección más importante que nos enseña Londres.

(*El País* - Opinión - 11-7-2005. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.) ■



El ataque al transporte urbano dejó medio millar de muertos y numerosos heridos.